

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 35
O R D I N A R I A
JUEVES 26 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del jueves veintiséis de marzo de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número treinta y cuatro ordinaria, celebrada el martes veinticuatro de marzo del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dichos proyectos.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves veintiséis de marzo de dos mil quince:

I. 124/2012

Controversia constitucional 124/2012, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en contra del Poder Legislativo y de los Municipios de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas Rosarito, todos de la referida entidad, demandando la invalidez del decreto 342 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de noviembre de dos mil doce, mediante el cual se aprueba la adición de un segundo párrafo al artículo 69, la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70, y la reforma a los artículos 93 y 94, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como de sus actos de aplicación. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto del artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 69, segundo párrafo; 70, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; y, 94, únicamente en la porción normativa que establece: “Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales”, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de noviembre de dos mil doce; en la inteligencia de que esta declaración no tendrá efectos retroactivos, por ende, no*

afectará las actuaciones realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales realizados y sus efectos futuros se surtirán a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena realizó la presentación del asunto y sometió a valoración los apartados procesales del proyecto. Por lo que ve a las causas de improcedencia, se desestima la hecha valer por el municipio codemandado, sin embargo, de oficio se actualiza la de cesación de efectos en relación con el artículo 93 de la Constitución Local, pues su redacción fue modificada el primero de noviembre de dos mil trece por virtud del artículo transitorio cuarto del diverso Decreto 106, publicado en el periódico oficial de la entidad el siete de octubre de dos mil once, tomando en cuenta que el criterio mayoritario de este Tribunal Pleno es que no sea posible analizar la constitucionalidad de un artículo cuando existe nuevo acto legislativo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III y IV relativos, respectivamente, a los antecedentes y trámite de la demanda, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación, la cual se aprobó en votación económica por

unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al apartado V, relativo a las causas de improcedencia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas manifestó duda concerniente a que en esta controversia constitucional se analiza un decreto previo al estudiado en la diversa 81/2013 en sesión pasada, en la cual se ordenó la publicación de dicho decreto para que cobraran vigencia las normas ahí contenidas y que si, en esos términos, afectaría o no a los efectos de la presente controversia o si se puede actualizar una causa de improcedencia por cesación de efectos.

El señor Ministro Cossío Díaz compartió la inquietud de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, sin embargo, indicó que desde que se ordenó la publicación del decreto en la controversia constitucional 81/2013 no existe causa para sustentar la cesación de efectos y, por ende, se debe analizar el acto impugnado en la presente controversia. En cambio, señaló que cesaron los efectos del artículo 93 por decreto de primero de noviembre de dos mil trece, y respecto del artículo 94 no hay conceptos de invalidez, por lo que únicamente se debe analizar lo concerniente a los

artículos 69 y 70, así como una posible afectación al artículo 93.

La señora Ministra Luna Ramos refirió tener una duda similar a la de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas y recordó que en la controversia constitucional 81/2013 se ordenó la publicación del decreto que trata dada la invalidez de todo el decreto y de su artículo transitorio segundo, por lo que se invalidó el acto de aplicación fundamentado en ese decreto; en ese sentido, el Congreso del Estado tendrá que emitir un nuevo artículo transitorio a través del cual determine a partir de cuál momento entrará en vigor el citado Decreto. Recordó que el Decreto 342 es el cuestionado en la presente controversia constitucional, anterior al invalidado en la controversia anterior, siendo que si el estudiado en esa controversia anterior no está vigente, entonces el Decreto 342 no ha cesado en sus efectos, por lo que debe analizarse. Por otra parte, no coincidió con la propuesta del proyecto en cuanto a que no se puede analizar la reforma del artículo 93 constitucional local contenida en el Decreto 342 porque se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos consistente en que el Decreto 106 modificó la redacción del citado artículo 93, ello en razón de que los artículos 27, 49 y 93 encontraron reformas importantes en el Decreto 106, publicado el siete de octubre de dos mil once y cuyo artículo transitorio cuarto preveía su entrada en vigor a partir del primero de noviembre de dos mil trece, siendo que el Decreto 342 se publicó el treinta de noviembre de dos mil doce con reformas al artículo 93 que

crean al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación por virtud de su artículo transitorio cuarto, por lo que la norma está vigente y no da lugar a la causa de improcedencia de cesación de efectos y, en consecuencia, se debe desestimar la causa de improcedencia como propone el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales coincidió con la señora Ministra Luna Ramos en que la norma está vigente por la temporalidad en que se publicaron las reformas y su entrada en vigor, respecto del artículo 93, siendo que el texto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce deroga al del siete de octubre de dos mil doce, a pesar de no haber entrado en vigor por su *vacatio legis*.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena expresó haber tenido esa misma duda, estimando que al publicarse el Decreto 342 aparentemente no se tuvo en cuenta el Decreto 106, por lo que el proyecto no trata de derogación tácita, sino que toma como texto vigente al derivado del Decreto 274 publicado en dos mil siete. No obstante, adelantó que si la mayoría del Tribunal Pleno opina que se dio una derogación tácita, lo modificaría en esos términos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que, de cualquier manera, no resultaría conveniente sobreseer respecto del artículo 93, pues tanto ese precepto como el 94 prevén la posibilidad de someter a juicio político al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y la

procedencia del juicio penal en su contra, precisando que en la demanda no hay conceptos de invalidez por vicios propios de esos numerales, sino únicamente porque incluyen la figura del citado Fiscal. Indicó que incluso podría configurarse la causa de improcedencia porque no hay conceptos de invalidez en contra de esos preceptos 93 y 94, sin embargo, si se declara la invalidez de los diversos 69 y 70, que prevén la figura del Fiscal en comento, sería incongruente que no se declaren inválidos a los artículos 93 y 94 por vía de consecuencia. Puntualizó que en la controversia constitucional pasada no se invalidó todo el decreto, sino sólo el artículo transitorio que establecía la entrada en vigor con la publicación en la gaceta parlamentaria, ordenándose su publicación en el periódico oficial de la entidad y que, en la presente controversia constitucional, se entra al fondo del asunto respecto de un decreto anterior al analizado en la controversia pasada, siendo que lo que se determine en cuanto al decreto en la presente pugna quedará sin efecto práctico en el momento en que se publique y entre en vigor el decreto estudiado en la controversia pasada.

El señor Ministro Medina Mora I. se manifestó en desacuerdo con la propuesta de sobreseimiento, puesto que en realidad se combate la creación de la fiscalía y, por consecuencia, deben considerarse impugnados los artículos 93 y 94, además de los numerales 69 y 70, por las razones expresadas por el señor Ministro Pardo Rebolledo.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena aclaró que, de sobreseerse en el caso, quedaría vigente el Decreto 106 que no prevé a la fiscalía, por lo que la declaración de invalidez del artículo 93 llevaría al mismo punto que su sobreseimiento.

El señor Ministro Cossío Díaz concordó con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que conviene resolver la controversia presente, pero que en cuanto a los artículos 93 y 94 existe la tesis de rubro *“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO.”*, por lo que al no haberse hecho valer conceptos de invalidez podría sobreseerse al respecto y, una vez que se determinen los efectos, se podría hacer extensiva la invalidez a los citados numerales por vía de consecuencia de la anulación de los otros dos artículos impugnados, independientemente de la puntual explicación cronológica de la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reseñó que la propuesta del señor Ministro Cossío Díaz es el sobreseimiento respecto de los artículos 93 y 94, de acuerdo con el criterio citado de este Tribunal Pleno.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena indicó que los artículos 93 y 94 están explícitamente impugnados en la página tres de la demanda y que en la diversa página nueve inician los conceptos de invalidez, cuyo segundo

punto de invalidez los refiere expresamente, como se advierte de la página cincuenta y cuatro.

Modificó el proyecto para sobreseer respecto del artículo 93, subsistiendo el texto del Decreto 106 que no menciona a la Fiscalía Especializada, aclarando que son cambios que no afectan significativamente.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de tener como impugnados a los artículos 93 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y que existe concepto de invalidez alusivo, la cual se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que el señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena tendría que ajustar el proyecto.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena recordó que se votó si estaba impugnado el artículo 93 o no, pero que la propuesta de este apartado es la configuración de la causa por cesación de efectos en virtud del Decreto 106.

El señor Ministro Pérez Dayán apuntó que existe un concepto de impugnación en contra de cualquier alusión a la

Constitución Local de esa fiscalía, y si bien se ha sostenido que cualquier cambio en la legislación provoca cesación de efectos, consideró que no se debe sobreseer en el caso, pues si al final los efectos extensivos alcanzan al artículo 93, se tendría que dar un contexto uniforme a la sentencia.

El señor Ministro Franco González Salas diferenció entre determinar que existe un concepto de invalidez alusivo, aunque genérico, y extender una invalidez, pues ésta estará sujeta a un estudio de fondo, indicando que esa fue la razón que dio origen al criterio citado por el señor Ministro Cossío Díaz.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales distinguió entre resolver que el artículo 93 está impugnado, así como que existe, en cierta forma, un concepto de invalidez atinente, y proponer la cesación de efectos del artículo 93 por otra causa de improcedencia, como lo hace el proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado V, relativo a las causas de improcedencia, respecto de la cual se emitieron diez votos en contra de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó a favor. Por tanto, por mayoría de diez votos se determinó que no debe sobreseerse respecto del artículo 93 impugnado.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena realizó la presentación del apartado VI, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone que es fundada la controversia constitucional porque el decreto impugnado rompe la unidad e indivisibilidad del ministerio público, invadiéndose la esfera de competencias del Poder Ejecutivo actor, por lo que se propone calificar de fundado el concepto de invalidez relativo a la invasión de su esfera competencial, en virtud de que la persecución de los delitos de mérito se encuentra asignados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, que se ubica dentro de la estructura de la Administración Pública Federal.

El señor Ministro Cossío Díaz se pronunció en contra de la propuesta, ya que el problema central es determinar si dos o más órganos pueden realizar válidamente la función de ministerio público, siendo que se ha seguido un modelo federal a partir de los artículos 21 y 102, apartado A, constitucional, en el cual se prevé al ministerio público como un órgano indivisible cuya función está a cargo de la Procuraduría General de la República, sin embargo, esa función concentrada a nivel entidad federativa no está prescrita constitucionalmente. Recordó que en la controversia constitucional 99/2004 se resolvió que el Congreso de Nayarit no podía realizar ninguna intromisión en el nombramiento del procurador del Estado, pues éste órgano formaba parte de la Administración Pública. Asimismo, rememoró el amparo en revisión 202/2013 en el cual votó en contra del criterio mayoritario. Concluyó que en

el artículo 116 constitucional no existe elemento de unidad alguno y, por ende, el Congreso del Estado puede separar la función en dos órganos: uno general y uno especializado en materia de delitos electorales, y si bien determina que este último sea autónomo, ello parece obedecer a una razón de que no exista injerencia alguna del propio Congreso. Por esta razón, anunció voto por la validez de los artículos en cuestión.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz, pues es primordial definir la naturaleza jurídica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y si el artículo 70 de la Constitución Local le da autonomía técnica y operativa, personalidad jurídica y patrimonio propios, se trata de un órgano constitucional autónomo, aunque no se diga expresamente, que mantiene relaciones de coordinación con otros órganos del Estado como la Procuraduría de Justicia del Estado, por lo que no puede trastocar el principio de división de poderes pues éste, como otros órganos constitucionales autónomos, surge bajo una idea de equilibrio constitucional que procura dejar la organización del Estado en los tres poderes tradicionales para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades. Indicó que si bien la función investigadora y persecutora del ministerio público ha sido catalogada tradicionalmente del Poder Ejecutivo, ello no quiere decir que le corresponda en exclusiva, sino que al ser funciones de Estado pueden depositarse en el órgano u órganos que se determine por

disposición constitucional, por lo que si el Estado de Baja California, en uso de su libertad configurativa depositó una función ministerial especializada en delitos electorales en la fiscalía materia de estudio, no invadió competencias del Ejecutivo local. Por esa razón, estimó infundado el argumento y, en consecuencia, constitucional el modelo de fiscalía en cuestión, anunciando voto en contra del proyecto.

El señor Ministro Medina Mora I. compartió el sentido de las consideraciones del proyecto, pues la especialidad de los delitos no puede convertir a un órgano en autónomo. Recordó que la reforma de dos mil ocho al artículo 21 constitucional implicó un cambio en que la facultad de investigación se comparte entre el ministerio público y la policía, pero el ministerio público la conduce al tener esa tarea fundamental y, por ende, unida e indivisible; asimismo, la reforma prevé el ejercicio de la acción penal privada que, aunque no reglamentada, rompe con el monopolio del ministerio público.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se expresó en contra del proyecto en términos semejantes a los del señor Ministro Cossío Díaz, en cuanto a que si la Constitución Federal en su artículo 21 asigna al ministerio público las facultades de investigación y persecución de los delitos, no significa que necesariamente un órgano del Estado deba cumplirlas. Advirtió que el párrafo ochenta y ocho del proyecto da por sentados los principios de unidad e indivisibilidad del ministerio público del contenido de dos

tesis aisladas de la Quinta y Sexta Épocas en un contexto meramente procesal. Aclaró que no se debe declarar la invalidez del decreto combatido porque no otorga la facultad a los particulares de consignar o ejercer la acción penal, y que el hecho de separar en dos órganos esa facultad no divide el ejercicio del ministerio público, pues la premisa del proyecto consistente en que tradicionalmente corresponde al Ejecutivo estatal no es concluyente, ya que la dinámica del derecho permite al Constituyente local extraer del Poder Ejecutivo ese cometido constitucional, en razón de que no se trata de un ejercicio de poder, sino de una función de Estado. Recapituló que en el derecho constitucional mexicano ha evolucionado el principio de división de poderes al grado de adoptar en la doctrina la existencia de los órganos constitucionales autónomos que, a pesar de no pertenecer a ninguno de los Poderes, realizan funciones y cometidos constitucionales. Señaló que el artículo 102, apartado A, constitucional establece a la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, por lo que no existe vulneración al principio de división de poderes previsto en el diverso artículo 116.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció en principio en contra del proyecto, pues si bien la unidad del ministerio público deriva de una larga tradición, a partir de la reforma de febrero de dos mil catorce se introdujo un marco constitucional para los Estados en esa materia, limitando el Constituyente por un lado la libre configuración de los Estado y por el otro, al mismo tiempo, trazó una línea general en el

artículo 116, fracción IX, constitucional, en el sentido de que las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Resaltó que autonomía no implica unidad, sino que es válido que se organice de manera diversa en tanto cumpla con la función constitucional, máxime que no existe elemento alguno en la normatividad del Estado que presuma el impedimento del logro de los demás principios. Recordó que el país ha tenido una conciencia de la democracia electoral y su reforzamiento desde la reforma de mil novecientos setenta y siete, por lo que si el artículo 116 constitucional obliga a establecer delitos electorales específicos, se sostendría válidamente el tener en el Estado un órgano especializado en esa materia que cumpla con los principios de la Constitución General, por lo que no existe razón para invalidar el decreto impugnado, máxime que no existe prohibición al respecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo compartió los argumentos de los señores Ministros que se han pronunciado en contra del proyecto. Señaló que la propuesta parte de un análisis del sistema tradicional de división de poderes y, con ello, llega a la conclusión de que se viola una esfera de competencia del Poder Ejecutivo Estatal; sin embargo, la intención del Constituyente local fue crear un órgano constitucional autónomo que, como otros del mismo tipo, terminará ejerciendo alguna facultad que previamente

tenía alguno de los Poderes del Estado, asimismo, con su creación se persiguió la separación del ámbito de injerencia del Ejecutivo Estatal por la materia electoral de la cual conocerá. Concluyó que la decisión del Constituyente de Baja California ni está prohibida ni resulta contraria a la Constitución federal.

El señor Ministro Pérez Dayán se pronunció en favor del proyecto porque destaca una característica importante de la estructura estatal que brinda los lineamientos generales para la creación de un órgano constitucional autónomo. Indicó que la innovación constitucional y la estructura de la Carta Magna no necesariamente parten del supuesto de hacer mejor las cosas, sino sobre la respuesta a una desconfianza, como ocurre en el caso, que la fiscalía de delitos electorales pase de un Poder a otro. Aclaró que la unidad del régimen administrativo se rompe tratándose de la transparencia, de derechos humanos, de competencia económica y de comunicaciones, pues en esas atribuciones el Estado participa de una idea global que implica acciones continuas y completas surgidas desde su propio seno. Resaltó que la impartición de justicia depende básicamente de la actuación de quien procura y que detrás del ejercicio de la acción penal concurren las subestructuras de una procuraduría tendente a vigilar el cumplimiento de la norma, por lo que la existencia de una fiscalía especializada para los delitos electorales entregada al Poder Legislativo supondría la existencia de ministerios públicos especializados dentro de cada juzgado para lograr la efectividad de las

competencias de dicha fiscalía. Refirió que el proyecto describe algunas otras fórmulas para garantizar un balance y unidad, como la responsabilidad compartida en el nombramiento de los fiscales. Consideró incorrecta la creación de un órgano constitucional autónomo paralelo al de la procuración de justicia sobre la base de una desconfianza, pues ello tiene una connotación absolutamente diferente del fin que se persigue, que es asegurar la independencia del fiscal especializado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó a favor del proyecto, recordando que el artículo 21 constitucional prevé que la facultad de investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a la policía, pero con el mando de aquél, por lo que sería posible que el ministerio público no dependa del Ejecutivo y que se divida este ejercicio en dos órganos distintos; sin embargo, el problema se presenta cuando dos órganos de naturaleza distinta ejercen la misma función, pues se rompe con la unidad funcional y constitucional del ministerio público. Señaló que los artículos 69 y 70 de la Constitución Local prevén la generación de una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyo ejercicio de persecución de esos delitos no forma parte, ni es titular, ni desarrolla la función de ministerio público, por lo que resulta abiertamente inconstitucional en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, máxime que el diverso artículo 71 de la Constitución de Baja California establece que el

Procurador General de Justicia dirigirá el ministerio público. Sugirió que se agregaran estos argumentos al proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos se pronunció en favor del proyecto, ya que el artículo 70 de la Constitución Local determina que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene autonomía técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y es responsable de la investigación de los delitos electorales, lo que, contrario a lo resuelto en el precedente de Nayarit, rompe el principio de indivisibilidad de la institución del ministerio público, sobre todo porque al fiscal de delitos electorales lo nombrará el Congreso del Estado y al Procurador General del Estado lo nombrará el gobernador. Resaltó que no se rompería la indivisibilidad del ministerio público si esa fiscalía formara parte de la estructura de la Procuraduría del Estado y se le otorgara autonomía técnica y de gestión. Por esa razón, estimó correcto el proyecto cuando afirma que se está vulnerando la indivisibilidad del ministerio público contenida en el artículo 21 constitucional y, por ende, la invalidez correspondiente, apartándose de algunas consideraciones y anunciando voto concurrente.

El señor Ministro Silva Meza recordó que la reforma de febrero de dos mil catorce en relación con el artículo 102 constitucional, determina que el ministerio público se organizará en una Fiscalía General de la República, alojando fiscalías generales especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, entre otras, lo cual

se trata de la determinación de la función; sin embargo, el órgano constitucional está determinado en el artículo 21 constitucional con el monopolio en el ejercicio de la acción penal, por lo que si se crea un órgano independiente del ministerio público donde se aloje esta función esencial constitutiva, se rompe con la unidad e indivisibilidad del ejercicio de la acción penal. Percibió que el modelo materia de estudio es una cuestión transitoria en función de los artículos 21, 102 y 116 constitucionales, para crear fiscales generales separados como órganos constitucionales autónomos, lo cual tendrá reflejo en las legislaturas estatales. Por estas razones, se manifestó en favor de la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Medina Mora I. refirió que la reforma al artículo 102 constitucional no ha entrado en vigor por estar sujeta a la aprobación de la legislación secundaria, y que su objeto es extraer de la esfera del Ejecutivo la función respectiva en un órgano único e indivisible en el cual se alojen todas las fiscalías, incluso las de delitos electorales y corrupción.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo el proyecto porque, en el fondo, la norma en estudio rompe el principio de monopolio e indivisibilidad del ministerio público. Adelantó que en su voto particular agregaría algunos argumentos del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales aclaró que, de llegar a desestimarse este asunto, se tendrían que estudiar otros conceptos de invalidez.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, respecto de la cual se manifestó una mayoría de seis votos a favor de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos en contra de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea con consideraciones adicionales, Silva Meza con consideraciones adicionales, Medina Mora I. con consideraciones adicionales y Pérez Dayán. Los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar Morales votaron en contra.

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez de los artículos 69, párrafo segundo, 70, párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y 94, en la porción normativa que indica “Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales”, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El señor Ministro ponente Gutiérrez Ortiz Mena anunció que realizaría el estudio de los demás conceptos de invalidez y que presentaría la propuesta para ser discutida el seis de abril del presente año.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales acordó prorrogar la discusión del asunto para la siguiente sesión y que continúe en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con diez minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la sesión pública ordinaria que se celebrará el lunes seis de abril de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.